



UPDATES PHILIPPINES

Publicación del Frente Democrático Nacional de Filipinas

Amsterdamsestraatweg 50, 3513AG Utrecht, Los Países Bajos

T: : +31 30 2310431 | E: editors@updatesphilippines.info | W: updatesphilippines.info

2022 Numero 7

Edición Español

1 de julio 2022

EDITORIAL

La historia se repite, en ciclos

El general Delfin Lorenzana, secretario de la Defensa Nacional del presidente saliente Rodrigo Duterte, aconsejó el mes pasado al presidente electo Ferdinand Marcos Jr. continuar enfocándose en el plan de contrainsurgencia del gobierno de Duterte y derrotar a las fuerzas revolucionarias.

Este es un consejo superfluo. Marcos Jr ya ha comenzado a establecer un régimen más represivo y abusivo de los derechos del pueblo filipino que el de su predecesor Duterte e incluso el de su padre Marcos Sr. Su elección de altos funcionarios para su administración entrante ya es una indicación adecuada.

Designó al senador Juan Ponce Enrile, uno de los principales artífices y administrador de la dictadura de ley marcial de Marcos padre, como asesor legal presidencial. Su Consejera de Seguridad Nacional, Clarita Carlos, ya cerró de golpe las puertas de las negociaciones de paz con el Frente Democrático Nacional de Filipinas, y profesó retener la notoria Fuerza de Tarea Nacional para poner fin al Conflicto Armado Comunista Local.

Pero el nombramiento más siniestro es el del general José Faustino Jr. como nuevo secretario de la Defensa Nacional. El general Faustino es el peor de los generales fascistas de las Fuerzas Armadas de Filipinas, responsable de la brutal campaña de bombardeos aéreos, ejecuciones extrajudiciales y graves abusos de los derechos humanos en Mindanao, especialmente después de que Duterte sometiera a toda la isla a la Ley Marcial en 2017. .

Adoctrinado y dirigido por los EE. UU., y sirviendo bajo las órdenes de Duterte, dirigió sucesivamente la 10.^a División de Infantería, el Comando de Mindanao Oriental y la Fuerza de Tarea Conjunta Mindanao de la AFP, todos conocidos por la sangrienta guerra contra los indígenas lumad y otras comunidades en Mindanao. Estas unidades de las AFP lanzaron campañas masivas de represión y pacificación contra las comunidades, las aldeas y el desmantelamiento de organizaciones comunitarias, para facilitar la entrada de capitalistas, en particular empresas estadounidenses, para apoderarse de sus tierras y saquear el entorno natural.

El Gral. Faustino como Secretario de la Defensa Nacional intensificará y extenderá la guerra sucia en Mindanao al resto del país, en el vano intento de aniquilar al defensor del pueblo, el Nuevo Ejército Popular.

Pero el general Faustino está librando una guerra perdida. El Partido Comunista de Filipinas revela que “el número de combatientes del NPA continúa multiplicándose, sus territorios continúan expandiéndose a áreas nuevas y antiguas, incluso disfrutaban de una base masiva de millones de personas, que brindan apoyo a su ejército”.

De hecho, el consejo de la Gral. Lorenzana a Marcos Jr. de centrarse en la contrainsurgencia es una admisión inequívoca de que el régimen de Duterte fracasó estrepitosamente en su jactancia de aplastar al ejército revolucionario antes del final de su mandato.

Marcos Jr. también encontrará que las fuerzas revolucionarias crecerán mucho más al final de su propio mandato. Así como lo hizo, ante el ignominioso fin de su padre, el dictador Marcos Sr. **UP**

‘Consejo anti-terrorista’ clasifica a Jalandoni y otras 5 personas como terroristas

“No soy un terrorista” declaró Luís G Jalandoni, mientras conocía su designación como terrorista por el consejo Anti-terrorismo del gobierno de Duterte. “He trabajado durante más de tres décadas por una paz justa y duradera en Filipinas”, añadía.

[continúa página siguiente...]



Luis G. Jalandoni. Foto de archivo del NDFP.

[... continuación]

Jalandoni es Asesor Principal del panel de negociación del National Democratic Front of the Philippines (NDFP) en las conversaciones de paz con el Gobierno de la República de Filipinas. Antes del 2016, sirvió como Presidente NDFP para la paz durante más de 20 años.

El “Consejo Anti-Terrorista” emitió su resolución n° 31, fechada en el 25 de mayo del 2022, aunque su publicación tuvo lugar el 15 de junio, etiquetando a Jalandoni y otras cinco personas como “terroristas individuales” por, supuestamente, ser líderes del Communist Party of the Philippines (CPP) y del NDFP.

El jefe de información del CPP, Marco Valbuena, sentenció, “El Partido y el movimiento revolucionario denuncian firmemente el reclamo tan descarado,

infundado e indignante. Fue hecho sin fundamentos y sin citar hechos judiciales concretos. Su objetivo es calumniar y restringir sus derechos democráticos”.

Valbuena, asimismo, declaró que “es el estado reaccionario Filipino, con el apoyo estadounidense, el auténtico terrorista...Sus fuerzas armadas y policía llevan a cabo asesinatos extrajudiciales, arrestos arbitrarios, torturas, evacuaciones masivas de las comunidades, imposiciones de toques de queda, bloqueos de alimentos y bombardeos aéreos, ametrallamiento y bombardeos a comunidades de civiles. **UP**



El fiscal de la CPI Karim Khan. Foto: icc-cpi.int

El fiscal de la CPI impulsa la reanudación de la investigación sobre el gobierno de Duterte

El fiscal de la Corte Penal Internacional Karim Khan solicitó el 24 de junio a la Sala de Cuestiones Preliminares de la CPI que permitiera a su oficina reanudar su investigación sobre crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra en Filipinas, a pesar de la solicitud de aplazamiento del gobierno de Duterte. [En su solicitud de 53 páginas](#), el fiscal de la CPI Khan declaró que el gobierno de Manila no ha demostrado que “haya investigado o esté

investigando” crímenes de la competencia de la CPI.

Khan solicitó a la Sala I de Cuestiones Preliminares de la CPI que autorizara la reanudación de las investigaciones sobre Filipinas, “a pesar de la solicitud de aplazamiento” del gobierno de Duterte, y que la Corte recibiera nuevas alegaciones de las víctimas o sus representantes “según un calendario expeditivo.”

La Sala de Cuestiones Preliminares de la CPI autorizó al fiscal de la CPI a iniciar una investigación formal en septiembre de 2021, que abarcará el periodo comprendido entre el 1 de julio de 2016, cuando Duterte asumió la presidencia, y el 16 de marzo de 2019, cuando Filipinas se retiró del Estatuto de Roma. La investigación también abarcará el tiempo en que Duterte fue alcalde y vicealcalde de la ciudad de Davao desde que la República de Filipinas pasó a formar parte de la CPI el 1 de noviembre de 2011.

Sin embargo, el fiscal de la CPI suspendió su investigación en noviembre de 2021 después de que el gobierno de Manila presentara una solicitud de aplazamiento a la Corte.

Khan declaró que “la mera preparación o voluntad de investigar o enjuiciar no es suficiente” para justificar el cese de las investigaciones. Rechazó la lista de 52 casos presentada por el Departamento de Justicia de Manila por considerarla meramente “administrativa” y de “revisión de escritorio” de un pequeño número de casos, y no constituye una actividad de investigación. “Esto no puede justificar el aplazamiento de la investigación de la CPI”, dijo.

El fiscal de la CPI también citó el informe de la Comisión Filipina de Derechos Humanos sobre los asesinatos relacionados con el narcotráfico cometidos entre 2016 y 2021, en el que se concluía que el [\[continúa página siguiente...\]](#)

[... continuación]

gobierno de Manila “no ha cumplido con su obligación de respetar y proteger los derechos humanos de todos los ciudadanos” y “ha fomentado una cultura de impunidad que protege a los autores de rendir cuentas.”

Dijo que los grupos que representan a las víctimas y las organizaciones de derechos humanos apoyan la reanudación de la investigación del Tribunal. “Sin esa investigación, la Fiscalía sostiene que existe un riesgo real de que los crímenes del Estatuto de Roma cometidos en Filipinas queden sin investigar y sin castigo”, dijo Khan.

Cuando se reanude la investigación de la CPI, el proceso se retomará donde se dejó, es decir, buscando pruebas para emitir órdenes de detención. **UP**

Denuncian la prohibición gubernamental de los medios de comunicación en línea

La orden del gobierno de Duterte de bloquear a los usuarios filipinos de Internet para que no visiten 25 sitios web que considera “afiliados y que apoyan a terroristas y organizaciones terroristas” suscitó una amplia condena. En la lista de sitios web prohibidos figuran los del Partido Comunista de Filipinas, el Frente Democrático Nacional de Filipinas y sus organizaciones aliadas, el presidente fundador del CPP, José María Sisón, organizaciones locales de noticias en línea y organizaciones comunitarias y activistas locales. También se incluyen sitios web de organizaciones internacionales y blogs de noticias.

El CPP denunció “la presión para erigir un cortafuegos antidemocrático en Internet en un intento desesperado de censurar las críticas y la disidencia en línea contra el régimen ilegítimo entrante de Marcos II, así como de suprimir el periodismo y la literatura progresista, patriótica y revolucionaria que expone los males del sistema gobernante”.

El jefe de información del CPP, Marco Valbuena, aclaró que de los 25 sitios web que se ordenó prohibir, “sólo siete están realmente afiliados al CPP y al NDFP... al menos seis sitios web de la lista elaborada al azar están inactivos”. Valbuena también expresó su sorpresa al encontrar en la lista a [Counterpunch](#) y [Monthly Review](#), ambas organizaciones con sede en Estados Unidos “que promueven opiniones progresistas”.

Las organizaciones internacionales de medios de comunicación criticaron la prohibición, especialmente contra los medios de comunicación independientes [Bulatlat](#) y [Pinoy Weekly](#). La Federación Internacional de Periodistas declaró: “Bloquear el acceso a organizaciones de medios de comunicación independientes con la justificación de supuestas afiliaciones terroristas es un claro intento de censura y control de los medios de comunicación.”

La Asociación de Corresponsales Extranjeros de Filipinas coincidió: “Las medidas adoptadas por los organismos gubernamentales para censurar a los medios de comunicación independientes son lamentables. Los intentos de controlar las narrativas y suprimir las críticas a las políticas del gobierno violan los principios democráticos.”

Phil Robertson, director adjunto para Asia de Human Rights Watch, criticó al gobierno de Duterte por su acoso a periodistas y activistas, y calificó la prohibición de “intento descarado” de censurar a los grupos y medios progresistas. “Lo que resulta sorprendente es la facilidad con la que el gobierno intensifica su retórica difamatoria, pasando de etiquetarlos en rojo a clasificarlos como terroristas, de hecho etiquetándolos como terroristas”, dijo Robertson.

Por su parte, el Colegio de Abogados de Filipinas declaró el 25 de junio que “la Comisión Nacional de Telecomunicaciones no está facultada para restringir el acceso a los sitios web de noticias y a los miembros de la prensa basándose en meras alegaciones” del asesor de seguridad nacional, el general Hermógenes Esperon. El IBP afirmó que la prohibición es una amenaza no sólo para la libertad de prensa, sino también para las actividades legítimas de los defensores de los derechos humanos y otros grupos progresistas.

El 6 de junio, el asesor de seguridad nacional del gobierno de Duterte, el general Hermógenes Esperon, ordenó a la Comisión Nacional de Telecomunicaciones que bloqueara el acceso de los usuarios de Internet filipinos a los 25 sitios web “afiliados a terroristas” y “partidarios de terroristas”. La lista incluía los sitios web de los grupos locales Bagong Alyansang Makabayan, la alianza de pescadores Pamalakaya, la alianza de mujeres campesinas AMIHAN, el sindicato de trabajadores agrícolas UMA, los Misioneros Rurales de Filipinas y la red Save Our Schools, así como los grupos internacionales International League of Peoples' Struggle e International Action Center. **UP**